

ITALIA

Paulino César Pardo Prieto

Profesor Titular de Universidad

Universidad de León

1.- CORTE DI CASAZIONE, SEZIONI UNITE. SENTENCIA DE 14 DE MARZO DE 2011.

En los siguientes epígrafes –y los correlativos anexos– comentamos varias sentencias que durante este año han incidido en los derechos a definir la propia identidad sexual y convivir en pareja. En la primera, la *Corte Costituzionale* resuelve acerca de la congruencia con la Constitución italiana del denominado “divorcio obligado”, esto es, la ruptura del matrimonio vigente operada *ex lege* como consecuencia de la inscripción registral del cambio de sexo de uno de los cónyuges. En segundo lugar referimos la polémica judicial en torno a la procedencia o no de la inscripción en el Registro Civil de los matrimonios celebrados en el extranjero entre ciudadanos italianos del mismo sexo. En el tercer epígrafe, el pleno reconocimiento del derecho a adoptar de la mujer conviviente de la madre biológica.

Por último, dedicado a una materia bien diversa, el cuarto epígrafe refiere el pronunciamiento de la Corte acerca de la legalidad de la exclusión de los profesores de religión católica de ciertos derechos económicos.

1. La inscripción del cambio de sexo de uno de los cónyuges determina la automática disolución del matrimonio¹.

¹ Balboni, M., y Gattuso, M., *Famiglia e identità di genere: “divorzio imposto” e diritti fondamentali*; Pezzini, B., *Il paradigma eterosessuale del matrimonio di nuovo davanti alla Corte costituzionale: la questione del divorzio imposto ex lege (ordinanza n. 14329/13 Corte di cassazione)*; Palmeri, G., *Diritto di famiglia*; Veronesi, P., *Il “caso Bernaroli” alla Corte costituzionale: ancora un bivio sul tema dell’eterosessualità del matrimonio*; Lorenzetti, A., *Quali possibili risposte dalla Corte di fronte ad un “incerto del mestiere di vivere”?*; Saitto, F., *Scioglimento ex lege del matrimonio*; Di

A través de la Sentencia 170/2014, la *Corte Costituzionale* resuelve una cuestión de constitucionalidad promovida por la *Corte di Cassazione* en relación al proceso iniciado por una pareja en orden a obtener la anulación de la anotación de “cesación” de los efectos de su vínculo matrimonial dispuesta por el encargado del Registro del Estado Civil una vez anotada la decisión judicial que había decidido la rectificación del sexo del marido (que pasa de ser masculino a femenino). La *Corte di Cassazione* concretamente pregunta si podrían ser contrarios a la Constitución y a la Convención Europea de los Derechos Humanos:

1) Aquellos apartados de la Ley 164/1982, sobre normas en materia de rectificación de la atribución de sexo, que disponen que la sentencia de rectificación provoca la automática cesación de los efectos civiles del matrimonio vigente sin necesidad de pronunciamiento judicial (arts. 2, 9 Const. italiana; 8 y 12 de la CEDDHH).

2) Aquellos apartados de la Ley 164/1982 que no permiten a quien obtiene la rectificación de la atribución de sexo ni a su cónyuge el derecho a oponerse a la ruptura del vínculo en el mismo procedimiento ni ejercitar la correspondiente acción en otro distinto, excluyendo, de este modo, la posibilidad de obtener una resolución judicial expresa sobre la eficacia de la disolución (art. 24 Const. Italiana).

Bari, M., Meglio cambiar genere che esser gay? Alcuni interrogativi sul ragionamento dell'ordinanza n. 14329/13 della Cassazione; Bergamini, E., Famiglia e identità di genere, “divorzio imposto” e diritti fondamentali: profili di diritto europeo; Ragni, Ch., Sciogliere un matrimonio per tutelarne cento? Il “divorzio” imposto tra interesse pubblico e diritti individuali; Romana Ammaturo, F., Il “divorzio imposto” per le persone transgender nella giurisprudenza: H. c. Finlandia; Viggiani, G., L'uso della comparazione come metodologia interpretativa nell'ordinanza di e i casi stranieri; Elvira, A., Transexualidad, matrimonio y divorcio en derecho comparado; Borrillo, D., Famille et identité de genre en France: La survie du mariage après le changement de sexe d'un époux; Amram, D., Identità di genere e famiglia in Irlanda, Regno unito e Islanda: quali spunti per l'Italia?. Todos ellos en Mutamento di sesso e divorzio imposto: il diritto all'identità di genere e al matrimonio, Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, 2014/1.

3) Aquellos apartados de la Ley 164/1982 que determinan una injustificada disparidad de regímenes jurídicos entre esta modalidad de disolución automática del vínculo conyugal y las demás hipótesis previstas en la legislación italiana (art. 3 Const. Italiana).

El tribunal, plantea que la opción del legislador italiano ha venido a acoger una suerte de “divorcio impuesto” *ex lege*, cuya eficacia no exige pronunciamiento judicial salvo en aquello que pueda tener relación con la posición de los posibles hijos menores. Tal solución podría resultar contradictoria con el sistema de derechos garantizado por la Constitución italiana y, en particular, el derecho al libre desarrollo de la identidad personal en torno al cual se articulan los derechos a: (1) la autodeterminación de la propia sexualidad; (2) la conservación de la preexistente dimensión afectiva –más cuando ésta asume los caracteres de estabilidad y continuidad característicos del vínculo conyugal-; (3) a no ser injustificadamente discriminado respecto de otras parejas casadas –que pueden elegir entre proceder o no al divorcio. De otro lado, podría tratarse de un “excesivo sacrificio” que se impone a quien, en definitiva, no ha hecho sino ejercer su legítimo derecho a adecuar la calificación sexual que figura en el registro a su identidad física.

La *Corte Costituzionale* acoge parcialmente los argumentos de la *Corte di Cassazione* señalando que los derechos a casarse, formar un familia y al respeto de la vida familiar –a que se refieren tanto la CEDDHH como la Const. Italiana-, no han sido vulnerados pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (H. contra Finlandia – decisión de 13 de noviembre de 2012-; Schalk and Kopf contra Austria – decisión de 22 de noviembre de 2010) ha reconducido al margen de apreciación de los Estados miembros la admisión o no de las uniones homosexuales, dejando a la discrecionalidad del legislador nacional las posibles modalidades de tutela de las parejas integradas por personas del mismo sexo.

Tampoco habría contradicción con los arts. 24 y 3 de la Constitución italiana. En cuanto al primero, porque, no existiendo un derecho reconocido legalmente a la pareja del mismo sexo a permanecer unida en matrimonio, no cabe hipotizar vulneración alguna desde la perspectiva de su defensa; en cuanto al segundo, porque la propia

diferencia entre el supuesto de hecho que da lugar a la disolución del vínculo por cambio de sexo de uno de los cónyuges y las demás causas de disolución previstas por el ordenamiento justifican su distinta regulación.

Sin embargo, a la vista del art. 2 de la Constitución, la *Corte Costituzionale* entiende que están en juego, de una parte, el interés del Estado, contrario a modificar el modelo heterosexual del matrimonio, y, de otro, el interés de la pareja que, al ejercitar un cónyuge su legítimo derecho al cambio de sexo, se ve gravada con el íntegro sacrificio de una situación jurídica preexistente que ambos querían mantener. La normativa cuya constitucionalidad se cuestiona, ante esta disyuntiva, se inclina por la exclusiva tutela del interés estatal, cortando de raíz cualquier ponderación con los intereses de una pareja que debiera ser tutelada en tanto “comunidad (...) caracterizada por la estable convivencia de dos personas, idónea para permitir y favorecer el libre desarrollo personal dentro de la relación” (cita la Sentencia de la *Corte Costituzionale* 138/2010). En ese punto reside el daño que las disposiciones señaladas infieren al art. 2 de la Constitución.

A pesar de que la regulación vigente imponga ese excesivo sacrificio al ejercicio del derecho, la *Corte Costituzionale* entiende excede a su competencia transformar la previsión del divorcio automático en un divorcio a instancia de parte pues debe ser el legislador quien incorpore al ordenamiento una fórmula alternativa que evite a los cónyuges pasar de una situación de máxima protección jurídica a una condición jurídica de completa inseguridad. Por esa razón, resuelve “llamar al legislador a proceder con la mayor diligencia a superar el actual déficit de tutela de los derechos de las personas inmersas en esta situación”.

(ANEXO I)

2.- La inscripción en Italia del matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero.

El encargado del Registro del Estado Civil de Grosseto denegó la inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero entre dos

hombres (concretamente, en Nueva York, en diciembre de 2012) atendiendo a que:

“a) la normativa italiana no permite que que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio; b) no es posible inscribir el acto matrimonial acontecido en el extranjero entre personas del mismo sexo por cuanto en el ordenamiento italiano tal matrimonio es contrario al orden público; c) el artículo 27 de la Ley n.º. 218 de 1995 dispone que la capacidad matrimonial y las demás condiciones para contraer matrimonio se regulan por la ley nacional vigente para cada uno de los contrayentes al momento de la celebración del matrimonio; d) no es de aplicación en el caso concreto la normativa contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (...) por cuanto según el art. 9 ‘los derechos a contraer matrimonio y establecer una familia serán garantizados según las leyes nacionales que regulan su ejercicio’”

En contra de ese criterio, el *Tribunale di Grosseto* obligó al *Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto* a inscribirlo en el Registro mediante *Ordinanza* de 9 de abril de 2014, al entender que: “a) el matrimonio civil entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero no es contrario al orden público; b) en los artículos 84 a 88 del Código civil no se contiene ninguna referencia al sexo en relación a las condiciones necesarias para contraer matrimonio; c) el artículo 27 de la Ley n.º. 218 de 1995 contiene una referencia implícita a las condiciones necesarias para contraer matrimonio a que se refiere (...) el Código civil, siendo de aplicación por tanto lo indicado en la letra b); d) permanece incontestado que el matrimonio celebrado en el extranjero es válido, en cuanto a la forma, si es considerado como tal por la ley del lugar de la celebración, como sucede en este supuesto; e) permanece incontestado que el matrimonio examinado produce efectos jurídicos en el ordenamiento del Estado donde se ha celebrado si no es contrario al orden público y en el italiano puede tenerlos igualmente por cuanto la transcripción no asume naturaleza constitutiva sino únicamente certificativa y de publicidad de un acto válido ‘*per se*’ sobre la base del principio ‘*tempus regit actum*’ (Cass. N.º. 17620/13; Cass. 10351/98)”.

Dos meses después, teniendo a la vista las consideraciones de este Tribunal, el Tribunal de Milán reafirma la contradicción con el orden público italiano de estas inscripciones (ANEXO II).

3. El ordenamiento italiano permite a la conviviente adoptar a la hija de su pareja.

El *Tribunale dei minorenni di Roma*, mediante Sentencia nº 299, de 30 de junio de 2014, ha admitido la adopción de los hijos por la conviviente del mismo sexo. La sentencia, recuerda que si bien el Tribunal Europeo de Estrasburgo ha admitido que forma parte del margen de apreciación del legislador nacional la regulación de un matrimonio entre personas del mismo sexo e incorporar al mismo la eventualidad de la adopción, lo cierto es que en el supuesto que se somete a su examen la norma admite la adopción. Por esta razón considera que sería ilegítimo desoír la solicitud de adopción atendiendo solo y exclusivamente a la orientación sexual de la solicitante pues estaría entonces actuando en contradicción con la norma nacional así como con los principios y derechos constitucionalmente reconocidos.

De otro lado, en sede judicial se ha venido apreciando que entre la solicitante de la adopción y la madre biológica de la niña existe “un vínculo que, más allá de cualquier clasificación jurídica, no es distinto del genuino vínculo parental” al punto de que negar los derechos y ventajas que de la relación adoptiva se deducirán para la niña constituye indubitablemente una opción que no se corresponde con el interés de la menor.

En este caso, no se trata de acceder a un derecho *ex novo* sino que tal acceso tiene lugar a partir de una situación básica preexistente que es necesario garantizar en interés de la menor: la niña ha crecido y se ha desarrollado entre dos mujeres a quienes reconoce como referentes afectivos primarios, al punto de dirigirse a ellas utilizando indistintamente el término “mamá”. Incluso las dos mujeres, que han oficializado su relación contrayendo matrimonio en España, han hecho uso de cuantos instrumentos jurídicos pone el Estado italiano a su alcance para regular su proyecto de vida, desde la suscripción de

acuerdos privados hasta la inscripción en el Registro de Uniones Civiles.

Por su lado, la recurrente -en una perspectiva económico asistencial- ha instituido garantías para la protección de la menor: incluyéndola como beneficiaria en su seguro sanitario, colaborando a su sostenimiento material y económico, facilitándole apoyo psicológico a lo largo de su proceso de maduración... Así, la madre biológica corrobora que su pareja, desde antes de la concepción, hizo suyo y dio su apoyo al proyecto de maternidad, actuando también siempre como madre al asumir como propias las obligaciones educativas y asistenciales o proporcionando afecto a la niña.

Todo ello concuerda bien con el hecho de que la niña se muestre perfectamente integrada en el ámbito escolar y familiar, unida a los parientes de la pareja por profundos vínculos afectivos y sin que quepa apreciar sombra alguna de aislamiento o perjuicio emotivo para ella; antes por el contrario, los dictámenes de peritos y testigos constatan que desde luego en este caso que no es ni el número ni el género de los progenitores lo que garantiza sin más las condiciones para el mejor desarrollo de los niños sino su capacidad para asumir el rol de progenitor y las responsabilidades educativas que le son propias.

A la vista de tales hechos, el Tribunal asume la interpretación de la norma aplicable en el sentido de que debe conceder la adopción, pues su juicio “debe guiarse por el bienestar y la tutela de un adecuado desarrollo de la niña cuyo único obstáculo en el transcurso de su crecimiento quizá proceda de unos ciertos prejuicios extendidos entre parte de la sociedad”, prejuicios que “el tribunal, en tanto garante del bienestar psicofísico de los niños no puede tomar en consideración” (ANEXO III).

4. Derechos económicos de los profesores de religión.

El *Tribunale ordinario di Sant'Angelo dei Lombardi* planteó a la *Corte Costituzionale* una cuestión de legitimidad constitucional – tocante a los artículos 3, 36, 11 y 117-, acerca del artículo 53.3 de la Ley 312/1980, sobre el nuevo modelo retributivo y funcional del

personal civil y militar del Estado, en la medida en que “excluye al personal de la escuela que no actúa como suplente del derecho a la consolidación de los incrementos económicos bianuales reconocidos al personal no estable a tiempo indeterminado” y también “en tanto el mismo precepto dispone un tratamiento desigual para los docentes de religión y los de las demás materias, incluso cuando unos y otros realicen suplencias que constituyan una prestación a tiempo determinado”.

La *Corte Costituzionale* recuerda que ya decidió en un supuesto idéntico, mediante Sentencia 146/2013, declarando inadmisibile la cuestión de legitimidad con respecto a los docentes no estables a tiempo indeterminado –atendiendo a la eliminación de esa figura de maestros- y no fundada la cuestión respecto a los docentes de religión, por entender que la categoría de docente de religión no puede ser observada como idóneo *tertium comparationis*.

Anexo I

Corte costituzionale, sentenza n. 170, anno 2014

Considerato in diritto

1. Chiamata a decidere sulla questione, al centro del giudizio principale, relativa agli «effetti della pronuncia di rettificazione di sesso su un matrimonio preesistente, regolarmente contratto dal soggetto che ha inteso esercitare il diritto a cambiare identità di genere in corso di vincolo, nell'ipotesi in cui né il medesimo soggetto né il coniuge abbiano intenzione di sciogliere il rapporto coniugale», la Corte di cassazione dubita che la soluzione al riguardo imposta dall'art. 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), non modificata dall'art. 7 della successiva legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) e poi confermata dall'art. 31 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), non applicabile in causa *ratione temporis* – la soluzione, cioè, di collegare alla sentenza

di rettificazione di sesso del coniuge l'effetto automatico di scioglimento del matrimonio – realizzi un bilanciamento adeguato tra l'interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia.

Il cosiddetto “divorzio imposto” – introdotto dalla normativa censurata (l'art. 4 ed il connesso art. 2 della legge n. 164 del 1982) – sconterebbe, infatti, ad avviso della Corte rimettente, un deficit di tutela, risolvendosi nel sacrificio indiscriminato, in assenza di strumenti compensativi, «del diritto di autodeterminarsi nelle scelte relative all'identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo; del diritto alla conservazione della preesistente dimensione relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo coniugale; del diritto a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate, alle quali è riconosciuta la possibilità di scelta in ordine al divorzio; del diritto dell'altro coniuge di scegliere se continuare la relazione coniugale».

Da qui, in particolare, il denunciato contrasto dell'art. 4 e, per quanto rileva, dell'art. 2 della legge n.164 del 1982 con gli artt. 2, 3 e 29 Cost., e con gli artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, evocati come norme interposte agli effetti della ulteriore violazione degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost. e la prospettazione del vulnus che si assume arrecato dagli artt. 2 e 4 della legge n°.164 del 1982 all'art. 24 Cost.

2. Con diffuse argomentazioni adesive alla motivazione dell'ordinanza di rinvio, la difesa dei ricorrenti ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 e, in via consequenziale, ex art. 27, legge n. 87 del 1953, dell'art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011.

3. Nel pervenire ad opposta conclusione di non fondatezza, sotto ogni profilo, della questione in esame, l'Avvocatura generale dello Stato ha richiamato, invece, in premessa, la non superabilità del “paradigma eterosessuale” del matrimonio, ribadito anche dalla sentenza di questa Corte n. 138 del 2010, e ne ha tratto il corollario che, in Italia, il

matrimonio già celebrato tra due persone eterosessuali, una delle quali modifichi in costanza di rapporto, senza opposizione dell'altra, la propria identità di genere venga, per ciò stesso, a caducarsi per "inesistenza acquisita".

Con l'ulteriore conseguenza – ad avviso, sempre di detta difesa – che «ciò a cui può aspirare il coniuge che cambia sesso in costanza di matrimonio è che, con il consenso del proprio compagno (o compagna) di vita, l'ordinamento riconosca il permanere del vincolo di comunanza affettiva con una adeguata e diversa tutela, che serva per l'appunto a non comprimere eccessivamente l'esercizio del diritto inviolabile all'autodeterminazione sessuale, ma non aspirare a conservare un istituto non più esistente».

4. In via preliminare, deve essere confermata l'ordinanza, adottata nel corso dell'udienza pubblica ed allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento dell'Avvocatura per i diritti LGBTI.

5. La questione è fondata, nei termini e limiti di cui appresso.

5.1. La situazione (sul piano fattuale innegabilmente infrequente, ma che, nella vicenda al centro del giudizio principale, si è comunque verificata) di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone, evidentemente, fuori dal modello del matrimonio – che, con il venir meno del requisito, per il nostro ordinamento essenziale, della eterosessualità, non può proseguire come tale – ma non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili.

5.2. Il parametro costituzionale di riferimento per una corretta valutazione della peculiare fattispecie in esame – in relazione ai prospettati quesiti sulla legittimità della disciplina, correttamente individuata dalla Corte di cassazione negli artt. 2 e 4 della Legge n. 164 del 1982, che la risolvono in termini di divorzio automatico – non

è dunque quello dell'art. 29 Cost. invocato in via principale dallo stesso collegio rimettente, poiché, come già sottolineato da questa Corte, la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela il citato art. 29 Cost.) è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che «stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso» (sentenza n. 138 del 2010).

Il che comporta che anche a colui (o colei) che cambia il proprio sesso non resta impedito di formare una famiglia, contraendo nuovo matrimonio con persona di sesso diverso da quello da lui (o lei) acquisito per rettifica.

5.3. Non pertinente è anche il riferimento agli artt. 8 (sul diritto al rispetto della vita familiare) e 12 (sul diritto di sposarsi e formare una famiglia) della CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (H. contro Finlandia – decisione del 13 novembre 2012; Schalk and Kopf contro Austria – decisione del 22 novembre 2010), invocati come norme interposte, ai sensi della denunciata violazione degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost. E ciò perché, in assenza di un consenso tra i vari Stati nazionali sul tema delle unioni omosessuali, la Corte EDU, sul presupposto del margine di apprezzamento conseguentemente loro riconosciuto, afferma essere riservate alla discrezionalità del legislatore nazionale le eventuali forme di tutela per le coppie di soggetti appartenenti al medesimo sesso.

La stessa sentenza della Corte EDU Schalk and Kopf contro Austria, citata nell'ordinanza di rimessione, nel ritenere possibile una interpretazione estensiva dell'art. 12 della CEDU nel senso della riferibilità del diritto di contrarre matrimonio anche alle coppie omosessuali, chiarisce come non derivi da una siffatta interpretazione una norma impositiva, di una tale estensione, per gli Stati membri.

5.4. Neppure sussiste, nei termini della sua prospettazione, il contrasto della normativa denunciata con i precetti di cui agli artt. 24 e 3 Cost.

Quanto al primo parametro, perché non essendo, per quanto detto, configurabile un diritto della coppia non più eterosessuale a rimanere unita nel vincolo del matrimonio, non ne è, di conseguenza, ipotizzabile alcun vulnus sul piano della difesa.

E quanto al parametro dell'art. 3 Cost., poiché la diversità della peculiare fattispecie di scioglimento a causa di mutamento del sesso di uno dei coniugi rispetto alle altre cause di scioglimento del matrimonio ne giustifica la differente disciplina.

5.5. Pertinente, è invece, il riferimento al precetto dell'art. 2 Cost.

Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare, nella richiamata sentenza n. 138 del 2010, che nella nozione di “formazione sociale” – nel quadro della quale l'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo – «è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

In quella stessa sentenza è stato, però, anche precisato doversi «escludere [...] che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio», come confermato, del resto, dalla diversità delle scelte operate dai Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette.

Dal che la conclusione, per un verso, che «nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette», e, per altro verso, che resta, però, comunque, «riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni», nel quadro di un controllo di ragionevolezza della rispettiva disciplina.

5.6. Sulla linea dei principi enunciati nella riferita sentenza, è innegabile che la condizione dei coniugi che intendano proseguire nella loro vita di coppia, pur dopo la modifica dei caratteri sessuali di uno di essi, con conseguente rettificazione anagrafica, sia riconducibile a quella categoria di situazioni “specifiche” e “particolari” di coppie dello stesso sesso, con riguardo alle quali ricorrono i presupposti per un intervento di questa Corte per il profilo,

appunto, di un controllo di adeguatezza e proporzionalità della disciplina adottata dal legislatore.

La fattispecie peculiare che viene qui in considerazione coinvolge, infatti, da un lato, l'interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi) e, dall'altro lato, l'interesse della coppia, attraversata da una vicenda di rettificazione di sesso, a che l'esercizio della libertà di scelta compiuta dall'un coniuge con il consenso dell'altro, relativamente ad un tal significativo aspetto della identità personale, non sia eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto, che essa vorrebbe, viceversa, mantenere in essere (in tal ultimo senso si sono indirizzate le pronunce della Corte costituzionale austriaca – VerfG 8 giugno 2006, n. 17849 – e della Corte costituzionale tedesca BVerfG, 1, Senato, ord. 27 maggio 2008, BvL 10/05).

La normativa – della cui legittimità dubita la Corte rimettente – risolve un tale contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di quello statuale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell'istituto del matrimonio, restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del progresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come «forma di comunità», connotata dalla «stabile convivenza tra due persone», «idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione» (sentenza n. 138 del 2010).

Sta in ciò, dunque, la ragione del *vulnus* che, per il profilo in esame, le disposizioni sottoposte al vaglio di costituzionalità arrecano al precepto dell'art. 2 Cost.

Tuttavia, non ne è possibile la *reductio ad legitimitatem* mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'art. 29 Cost. Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che

consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.

5.7. Va, pertanto, dichiarata – in accoglimento, per quanto di ragione, delle sollevate questioni l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 n. 164, con riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore.

5.8. Negli stessi termini, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, n. 87, va estesa all'art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 4 della legge n. 164 del 1982, abrogato dall'art. 36 del medesimo d.lgs., ma che ne ripete, con minima ininfluyente variante lessicale, identicamente il contenuto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore; 2) dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art.

31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi dell'accoppiata medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

Anexo II

Tribunale di Milano, Decreto del 17 luglio 2014

...Rilevato che i ricorrenti ... propongono ricorso ex artt. 95 e 96 DPR 396/2000 contro il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di Milano di procedere alla trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in Lisbona, Portogallo;

rilevato che sulla questione oggetto dell'odierno procedimento, questa Sezione ha già assunto una lettura interpretativa, in particolare nel decreto Trib. Milano, 2 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. Muscio);

ritenuto che il ricorso proposto non può trovare accoglimento, dovendosi affermare, secondo questo Tribunale, che l'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non può essere trascritto perché non è idoneo a spiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento sulla base della attuale vigente normativa;

ritenuto che nel caso di specie è incontestato che il matrimonio è stato contratto tra persone dello stesso sesso, come risulta dall'atto di matrimonio prodotto (confr. doc. 2);

ritenuto che la trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile sia soggetta al principio di tassatività come si ricava dall'art. 10 comma 1

del DPR 396/2000 e per quanto attiene agli atti di matrimonio dall'art. 63 comma 2 del suddetto DPR;

ritenuto che l'evoluzione giurisprudenziale della questione sul diritto a contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso e di conseguenza sul diritto alla trascrizione del relativo atto di matrimonio contratto all'estero è stata ricostruita in modo chiaro e puntuale nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 4184/2012, tenuto conto della fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 138/2010 e dei principi contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8, 12 e 14 CEDU) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9 Carta di Nizza) e delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 Prima Sezione caso Schalk e Kopf contro Austria);

ritenuto che, sulla base dei principi sanciti da tale importante arresto della Suprema Corte, se può dirsi superata l'interpretazione consolidata della c.d. "inesistenza giuridica" dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, non può affatto dirsi affermato il diritto di persone dello stesso sesso a contrarre matrimonio come diritto riconosciuto dalla nostra costituzione e dallo stesso ordinamento sovranazionale;

ritenuto, infatti, che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 138/2010, pur dovendosi riconoscere in forza dell'art. 2 della Carta Costituzionale "l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al

Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni", deve escludersi secondo la stessa Corte delle Leggi che "l'art. 2 Cost. riconosce il diritto al matrimonio delle persone dello stesso sesso e neppure vincola il legislatore a garantire tale diritto quale forma esclusiva del riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale, vale a dire ad "equiparare" le unioni omosessuali al matrimonio";

ritenuto che ad analoghe conclusioni si perviene alla luce dei principi comunitari come ricostruiti nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione là dove, chiarisce la nostra Corte di Legittimità, la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione evolutiva di tutte le disposizioni coinvolte nella questione afferma che, pur derivando da tali disposizioni una più ampia accezione di diritto al matrimonio come diritto inclusivo anche del matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso, "la "garanzia" del diritto ad un matrimonio siffatto è totalmente riservata al potere legislativo degli Stati contraenti della Convenzione e/o membri dell'Unione Europea", precisando la stessa Corte Europea dei diritti dell'Uomo che "l'art. 12 della Convenzione non faccia obbligo allo Stato convenuto nella specie, l'Austria di concedere l'accesso al matrimonio a una coppia omosessuale come i ricorrenti". A quest'ultimo riguardo, secondo l'impostazione della Corte, le ora richiamate disposizioni, pur "riconoscendo" detti diritti, sono state tuttavia formulate in modo tale da separare il "riconoscimento" dalla "garanzia" degli stessi: infatti, l'art.12 della CEDU riconosce "il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia", ma "secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto"; corrispondentemente, l'art. 9 della Carta di Nizza riconosce "il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia", ma al contempo afferma che questi diritti "sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". E la ragione di questa "separazione" – come emerge nitidamente dalla motivazione della sentenza della Corte Europea – sta nella constatazione delle notevoli ed a volte profonde differenze sociali, culturali e giuridiche, che ancora connotano le discipline legislative della famiglia e del

matrimonio dei Paesi aderenti alla Convenzione e/o membri dell'Unione Europea”;

ritenuto che la sopra descritta evoluzione giurisprudenziale europea comporta, come chiarito dalla Corte di Cassazione, unicamente che la ragione della non trascrivibilità dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero non può più identificarsi nell'inesistenza del matrimonio per mancanza di un requisito minimo indispensabile, ma nell'ineidoneità a produrre quale atto di matrimonio appunto qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; e ciò proprio in ragione della mancanza di una normativa sul punto che sia per l'ordinamento costituzionale interno sia per l'ordinamento sovranazionale è riservata in via esclusiva al Parlamento Nazionale e che non può certo essere in alcun modo estrapolata in via interpretativa; ritenuto poi che la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, diversamente da quanto asseriscono i ricorrenti anche richiamando sul punto il precedente del Tribunale Ordinario di Grosseto, non affronta in alcun modo, proprio perché del tutto assorbita dalle ampie argomentazioni esposte, la questione della contrarietà all'ordine pubblico che attiene agli effetti dell'atto, questione che per le stesse ragioni in questa sede ben può ritenersi assorbita;

ritenuto che conferma della posizione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione o meglio ancora rafforzamento del modello eterosessuale del matrimonio alla luce dell'attuale diritto interno, ferma la discrezionalità del Parlamento Nazionale di stabilire forme di tutela per le coppie di soggetti appartenenti allo stesso sesso, si ricava dalla recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 170/2014 che, affrontando nuovamente la questione sia pure in relazione ad una fattispecie specifica diversa, ha di fatto ribadito le considerazioni esposte nella propria pronuncia n. 138/2010, affermando che allo stato per il diritto italiano, sia pure interpretato alla luce dei principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della Carta di Nizza, in ragione dell'art. della Costituzione e della sua interpretazione consolidata alla luce della normativa primaria vigente il matrimonio continua ad avere quale presupposto la diversità di genere dei nubendi, essendo compito del Parlamento intervenire per individuare e garantire le forme di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso;

ritenuto, quindi, per tutte le considerazioni su esposte che l'atto di matrimonio di cui i ricorrenti chiedono la trascrizione non può essere trascritto nei registri dello Stato Civile; ritenuto che non siano state addotte ragioni tali da indurre il Tribunale a mutare il proprio indirizzo dovendosi dunque pronunciare in senso conforme alla decisione su riportata; ritenuto che il rigetto nel merito renda superfluo l'esame delle ulteriori questioni in rito (cd. principio della ragione più liquida).

Visti gli artt. 95 e 96 DPR 396/2000 e 737 c.p.c.;

P.Q.M. respinge il ricorso proposto in data 6 giugno 2014 da ...

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Milano il 17 luglio 2014.

Anexo III

Tribunale dei minorenni di roma. Sentenza 30 giugno – 30 luglio 2014, N. 299

Applicazione dei principi di diritto al caso di specie.

Osserva il Collegio, in via preliminare, che, alla luce delle motivazioni svolte, sarebbe illegittimo respingere la domanda sottoposta dalla ... all'esame di questo Tribunale solo ed esclusivamente a motivo del suo orientamento sessuale, in aperto contrasto con la lettera e la ratio della norma, nonché con i principi costituzionali e i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU. Fermo restando che, come sottolineato dalla Corte di Strasburgo, la possibilità di introdurre o meno il matrimonio per le coppie omosessuali, così come la decisione di ammetterle alla domanda di adozione, costituisce una scelta dei legislatori nazionali dei singoli Paesi, che dovranno operare il bilanciamento tra contrapposti interessi, la possibilità di evitare il pregiudizio di terzi, nel caso di specie di una bambina, ove l'interpretazione della legge già in vigore in uno Stato lo consenta, s'impone.

Nel caso di specie, non si può non tenere conto delle situazioni che sono da tempo esistenti e cristallizzate: ... è nata e cresciuta con la ricorrente e la sua compagna, madre biologica della bimba, instaurando con loro un legame inscindibile che, a prescindere da

qualsiasi "classificazione giuridica", nulla ha di diverso rispetto a un vero e proprio vincolo genitoriale. Negare alla bambina i diritti e i vantaggi che derivano da questo rapporto costituirebbe certamente una scelta non corrispondente all'interesse della minore, che, come indicato dalla Corte Costituzionale stessa e dalla Corte Europea del Diritto dell'Uomo, occorre sempre valutare in concrete.

Nel caso di specie non si tratta, infatti, di concedere un diritto ex novo, creando una situazione prima inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto già esistente da anni, nell'esclusivo interesse di una bambina che è da sempre cresciuta e stata allevata da due donne, che essa stessa riconosce come riferimenti affettivi primari, al punto tale da chiamare entrambe "mamma". L'art. 44, co. 1, lett. d) della richiamata legge costituisce, a tal fine e da sempre, l'apposito strumento, configurandosi come una "porta aperta" sui cambiamenti che la nostra società ci propone con una continuità ed una velocità cui il Legislatore fatica a tenere dietro, ma cui il Giudice minorile non può restare indifferente, se in ogni suo provvedimento deve, effettivamente, garantire l'interesse superiore del minore.

Oltre a ciò occorre sottolineare che le due donne hanno utilizzato tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione per ufficializzare la forza e la stabilità del loro progetto di vita, dalla sottoscrizione di accordi privati alla iscrizione nel Registro delle Unioni Civili -unici strumenti previsti allo stato in Italia al matrimonio celebrato in Spagna.

Orunque, se uno dei motivi, per i quali la legge indica nelle coppie coniugate il nucleo maggiormente idoneo per l'adozione dei minori, è costituito dalla stabilità, così come sostenuto dalla sorte Costituzionale stessa, non pare che nel caso di specie emergano elementi in contrasto, dato che le due donne convivono ormai stabilmente da più di dieci anni ed hanno voluto contrarre, per rafforzare il loro reciproco impegno di fedeltà, il vincolo matrimoniale in uno dei Paesi europei che riconosce tale diritto a tutti gli uomini e le donne.

Sotto il profilo economico-assistenziale, la ricorrente ha costituito garanzie a favore e a tutela della minore, inserendola quale beneficiaria sia nella propria assicurazione sanitaria ENPAP, sia nella propria polizza integrativa privata ... La ricorrente esercita la professione di psicoterapeuta in ... ed ha dimostrato di avere un

reddito sufficiente e sostenere, in collaborazione con la convivente ... i bisogni dell'adottanda, nonché a fornirle ogni sostegno psicologico necessario al di lei percorso evolutivo, tenuto anche conto della sua professione.

Occorre qui considerare come degne della massima considerazione le valutazioni estremamente positive che la psicologa, l'assistente sociale e l'insegnante hanno riportato sullo stato di salute fisica e psicologica di ..., che è apparsa a tutti serena, unita da un profondo legame affettivo alle sue due madri, e assolutamente ben inserita nell'ambiente scolastico e familiare che la circonda, ove tra l'altro, grazie anche alla presenza costante dei nonni, ha modo di osservare vari modelli di coppia esistenti, non risultando per tanto isolata o pregiudicata a livello emotivo in alcun modo.

Tanto meno può essere sottovalutato che è stata la madre ... a chiedere essa stessa che venga riconosciuta la genitorialità anche della donna che ha, sin da prima del concepimento, insieme con lei, intrapreso e sostenuto questo progetto di maternità, ritenendola madre a tutti gli effetti condividendo con lei compiti educativi e assistenziali, partecipando entrambe dell'affetto della bambina e ricambiandolo parimenti entrambe, con slancio ed abnegazione intelligente, per garantirle la migliore qualità della vita in un periodo così importante quale è l'infanzia. E', difatti, proprio in questo momento evolutivo che i bambini costruiscono dei modelli interni delle rappresentazioni, delle esperienze di relazione che nella realtà hanno luogo con la figura che maggiormente si è presa cura di loro sin dalla nascita e, pertanto, non necessariamente definibile genitoriale, tanto meno appartenente ad un preciso orientamento sessuale.

Peraltro, i giudici onorari, che hanno partecipato alla decisione, del Collegio, affannano che il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno. In altri termini, non sono né il numero né il genere dei genitori a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano.

In particolare, hanno messo in evidenza come ciò che è importante per il benessere dei bambini è la qualità dell'ambiente familiare che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che essi siano dello stesso sesso o che abbiano lo stesso orientamento.

Il Collegio ritiene che la normativa deve poter essere interpretata alla luce della emergenza sociali che bastano per il riconoscimento di nuove forme di genitorialità. E nel caso di specie l'interpretazione della norma è nel senso di essere applicabile a tali nuove forme di genitorialità, senza forzatura alcuna.

Gli elementi sui quali il Collegio ha posto la sua l'attenzione, nella convinzione che può, non essendovi alcun divieto nella legge in vigore, e deve aderire a questa interpretazione, sono il benessere e la tutela di un sano sviluppo psicologico della piccola ... il cui unico pregiudizio nel percorso di crescita andrebbe presumibilmente rintracciato nel convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela del benessere psicofisico dei bambini, non può e non deve aderire stigmatizzando una genitorialità "diversa", ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale.

Appare qui opportuno richiamare ancora una volta la già citata sentenza della Corte di Cassazione 601/13 in cui il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso contro l'affidamento esclusivo di una minore alla madre convivente con una donna cui era legata da una relazione omosessuale, ritenendo che "alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino....".

In conclusione il Collegio ritiene che il ricorso proposto dalla ricorrente deve essere accolto in quanto ne sussistono tutti i presupposti di diritto e di fatto ed atteso che risponde all'interesse della minore essere adottata dalla ricorrente, la quale costituisce per ... un riferimento stabile e significativo, ed ancora che la madre della bambina ha espresso il suo consenso a tal fine. Per l'effetto, l'adottata

aggiungerà il cognome dell'adottante al proprio cognome di origine, così come richiesto dalla ...

P.Q.M.

Su difforme parere del P.M.M. letto l'art. art. 44 lettera d) L. 184/83 e successive modifiche; dispone

- farsi luogo all'adozione di ..., nata a ... il ... da parte di ..., nata a ... il ... e residente a ...

- che la minore ..., aggiunga il cognome dell'adottante al proprio e si denomini ...

Ordina la comunicazione per esteso al P.M.M. in sede, alla ricorrente ..., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ... in Roma alla via ..., alla madre della minore e ... residente in ... alla ..., a mezzo fax al G.I.L. adozioni del Municipio ..., una volta divenuta esecutiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ... per la trascrizione di rito.

Così deciso il 30 giugno 2014.

Depositato in cancelleria il 30 luglio 2014.

Anexo IV

Ordinanza 101/2014. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Considerato che il Tribunale ordinario di Sant'Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in riguardo alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio – questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui «esclude il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato», nonché «nella parte in

cui, con riferimento all'ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato»;

che questa Corte, con la sentenza n. 146 del 2013, occupandosi di una vicenda pressoché identica a quella odierna, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 con riguardo al *tertium comparationis* costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, mentre ha dichiarato non fondata la questione avente ad oggetto il medesimo art. 53, terzo comma, con riguardo al *tertium comparationis* costituito dai docenti di religione;

che in quella pronuncia la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della prima questione in considerazione della sopravvenuta eliminazione della figura dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato, mentre ha dichiarato la non fondatezza della seconda, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali oggi richiamati, attesa l'ineidoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da idoneo *tertium comparationis*;

che l'odierno rimettente non aggiunge, rispetto a quelli oggetto di esame nella sentenza n. 146 del 2013, argomenti ulteriori o diversi di censura;

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 con riguardo al *tertium comparationis* costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, mentre va dichiarata la manifesta infondatezza della questione, avente ad oggetto la medesima disposizione, con riguardo al *tertium comparationis* costituito dai docenti di religione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio – dal Tribunale ordinario di Sant'Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 sollevata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti di religione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

